

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Querétaro por D. José Noriega Llaca, por sí y en representación de varias personas del comercio de Querétaro, contra la concesión hecha á la casa de D. Cayetano Rubio por el Gobierno del Estado, en el contrato celebrado en la hacienda de Ajuchilán el 20 de Diciembre de 1871 por el C. Julio María Cervantes como Gobernador, y con autorización especial de la Legislatura, por violación de garantías.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que en 23 de Mayo de 1868, el Congreso de la Union decretó la apertura de un camino carretero, que partiendo de la Ciudad de Querétaro terminara en Tampico, autorizando al Ejecutivo federal para hacerla, por sí ó por contrata al mejor postor, y destinando para este objeto, la cantidad de seis mil pesos mensuales. En virtud de este decreto se contrató en 30 de Noviembre de 1871 con los Sres. Luis M. Rubio y Compañía la apertura del camino, segun las bases aprobadas por el Ministerio de Fomento.

En 13 de Diciembre de 1870, el Congreso del Estado de Querétaro dió facultades al C. Gobernador del mismo Estado, para que contratara con el Supremo Gobierno la apertura del mismo camino, pudiendo formar compañía en el Estado ó fuera de él con este objeto, y por esta autorización el C. Gobernador Juhó María Cervantes, pidió al Gobierno general la aprobación de las bases contenidas en la comunicacion de 11 de Febrero de 1871, á la que contestó el C. Presidente de la República, que sería conveniente se procediera á la formacion de la compañía que quisiera contratar esta obra,

TOMO V.—PARTE II.

á fin de que ya organizada, se arreglaran las condiciones bajo las cuales debía llevarse á efecto, previa la aprobación del Gobierno, y se pudiera determinar el abono de los fondos que para el expresado camino señalaba la ley de presupuestos.

El Ejecutivo de Querétaro, en virtud de las facultades que el último decreto le concedió, contrató con los Sres. Luis M. Rubio y Compañía la apertura del camino de Querétaro á Tampico, bajo las bases que obran en documentos oficiales en estas actuaciones, siendo las principales con relacion al presente juicio, que los Sres. Rubio y Compañía estipularian con el Gobierno general las condiciones y términos bajo los cuales debía abrirse la vía, que estaría concluida en tres años contados desde el dia 1º de Enero de 1872, y durante este periodo de tiempo la casa de Rubio estaria libre del pago de toda clase de impuestos establecidos actualmente y de los que se establecieran en lo sucesivo, en sus propiedades, industria, contratos ó introducciones de efectos relativos á sus establecimientos y á los materiales necesarios para la conduccion de la vía. Este contrato fué reducido á escritura pública ratificado por la Legislatura de Querétaro en 26 de Diciembre de 1871.

La casa de los Sres. Rubio celebró en consecuencia dos contratos con el mismo objeto, con dos autoridades distintas; por lo cual el C. Presidente de la República, mandó que éstos Señores expresaran oficialmente y de una manera esplicita, cuál de los dos contratos se proponian cumplir. En contestacion manifestaron: que estaban resueltos á dar cumplimiento al convenio celebrado con el Gobierno general en 30 de Noviembre de 1870.

Sin embargo de esta declaracion, en 18 de Febrero de 1872 se celebró un nuevo contrato entre los Sres. Rubio y el C. Gobernador del Estado de Querétaro, facultado por la Legislatura del mismo, destruyendo el anterior y conviniendo que quedaba sin efecto la cláusula en que se concedió la

exencion de impuestos, creando en su lugar una subvencion que se pagaría mensualmente á los Sres Rubio, de la cantidad de mil ciento setenta y seis pesos setenta y seis centavos, desde el 1º del próximo Noviembre hasta el 30 de Agosto de 1874, quedando sugetos desde la primera fecha al pago de toda clase de impuestos, pudiendo deducir de la cantidad que pagan por razon de ellos, la suma á que asciende la subvencion.

El contrato celebrado en 20 de Diciembre de 1871, concediendo á la casa de los Sres. Rubio la exencion del pago de contribuciones, ha motivado el presente recurso de amparo, fundado en la violacion del artículo 28 de la Carta fundamental de la República, promovido por el Sr. D. José María Llaca, por sí y á nombre de cuarenta y dos comerciantes de la Plaza de Querétaro, y del cual conoce el Juzgado de Distrito de este Estado por la declaracion que hizo la Suprema Corte de Justicia, por haberse excusado el Juez propietario y los tres suplentes de aquel Estado; sentenciado el juicio por todos sus trámites hasta ponerlo en estado de alegar, el Promotor fiscal tiene que dar su parecer sobre el punto principal del juicio, atendiendo á las pruebas rendidas en el término probatorio.

Los peticionarios, usando del derecho concedido en los artículos 101 y 102 de la Constitucion y en cumplimiento del artículo 4º de la ley de 20 de Enero de 1869, señalan como violada en sus personas la garantía individual que otorga el artículo 28, y hacen consistir su violacion en dos hechos: la exencion de contribuciones estipulada en el contrato de 20 de Diciembre de 1871 á favor de la casa Rubio y Compañía, y la emision de documentos de créditos ó vales al portador que expresan cierta cantidad de dinero, que se paga en efectos en las tiendas de los contratistas á los jornaleros que trabajan en la apertura del camino á Tampico.

Fundan los quejosos la falta á la Constitucion por el primer hecho, considerándolo-

lo como un privilegio que produce un monopolio perjudicial al comercio, atrayendo á los consumidores á las tiendas de los contratistas; porque no pagando impuesto alguno, pueden dar sus efectos mas baratos causando la ruina de los demas comerciantes y señaladamente la de los quejosos, y la escasez en el Erario de aquel Estado, que para cubrir los gastos de su administracion ha sido necesario crear nuevos impuestos.

En el término de prueba se han presentado los documentos oficiales de qué se ha hablado al principio, y se ha probado que los Sres Rubio dejaron de pagar las contribuciones hasta que se celebró el último contrato, y se ha fijado la cantidad á que ascienden los impuestos que sin esta exencion debieron haber pagado, y la baja en los productos de las tiendas de otros comerciantes.

El Promotor fiscal cree, que no debe examinar si la exencion de contribuciones á favor de los Sres. Rubio, fué una medida inútil, supuesto el contrato celebrado con el Supremo Gobierno, y si grava ó no los intereses fiscales del Estado de Querétaro, sino únicamente si existe la violacion de las garantías individuales que se han invocado. A la palabra privilegio puede darse una significacion mas estensa que la que tiene en el artículo 28 de la Constitucion.

La ley que concede la administracion libre de sus bienes á un menor de edad, crea un privilegio; y sin embargo, no está comprendido en el artículo constitucional citado, que tuvo por objeto establecer la igualdad del comercio, consecuencia necesaria de la igualdad ante la ley, que es una de las bases de nuestras instituciones políticas, no permitiendo que un individuo ó varios se dediquen á cierta clase de giro ó industria, del cual estén excluidos los demas.

El artículo 28 de la Constitucion, dice: *No habrá monopolios ni estancos de ninguna clase*, cuyas palabras entrañan la idea de la exclusion de todos los individuos con excepcion de algunos, y lo mismo deben entenderse sus palabras siguientes, de las que

se desprende con mas claridad esta idea, ni prohibiciones á título de proteccion á la industria, exceptuándose únicamente los relativos á la acuñacion de la moneda, á los correos y á los privilegios, que por tiempo limitado concede la ley á los inventores ó perfeccionadores de alguna mejora.

Segun esta interpretacion, el privilegio que se concedió á los Sres Rubio no constituye un monopolio, porque siendo el fundamento de los quejosos que por él han bajado el precio de sus efectos y se han atraído á los consumidores, esta razon subsistiría si por cualquiera otra causa hubieran hecho lo mismo los contratistas; pero por parte de la autoridad, no envuelve la prohibicion de que los quejosos se dediquen al comercio, giro ó industria de los Sres. Rubio. La modificacion hecha por el último contrato destruyendo la exencion de un impuesto y creando en su lugar una subvencion, varía la cuestion.

Estuvo en las facultades de la Legislatura de Querétaro, decretar esta subvencion, al autorizar al Ejecutivo del mismo Estado para celebrar este contrato; y aunque pudiera decirse que el resultado es el mismo, porque pudiera suceder que los Sres. Rubio obtuvieran de las dos maneras las mismas ventajas, principalmente pudiendo deducir la cantidad de la subvencion de la que deben pagar por contribuciones, estas ventajas dimanarán de que los contratistas no necesiten emplear en los trabajos del camino esta cantidad, la cual subsistiría si hubieran obtenido una utilidad igual por cualquiera otra causa, y querría decir que la subvencion sería inútil, y que gravando al Estado sin necesidad, no debió concederse; pero no que crea un monopolio, una prohibicion de que los quejosos se dediquen al comercio que actualmente ejercen.

El segundo hecho que se dice contrario al mismo artículo de la Constitucion y que consiste en la emision de vales, que está probado que la casa de Rubio pagaba de una manera pública, girados entre los de-

pendientes de la misma casa, y que representan cierta cantidad que se paga al portador en efectos, no es tampoco un verdadero monopolio. No está probado que el pago que de esta manera se hace á los trabajadores en el camino de Tampico, no esté conforme con el contrato que celebren con los contratistas, y aparece que en vez de estos vales al portador se han sustituido libretas, en que lleva la cuenta corriente de cada uno de los trabajadores, lo cual destruye la primera cuestion.

Los jornaleros que sean obligados contra su voluntad, á recibir efectos en vez de dinero, tendrán sus derechos expeditos contra los contratistas; pero los quejosos no pueden hacer que estos jornaleros en uso de su libertad, no se obligen á recibir de esta manera parte de la recompensa de su trabajo, recibiendo como prueba de su crédito los vales ó libretas de su cuenta que han sido reconocidos por los dependientes de la casa de Rubio que los han suscrito.

Por las razones expuestas, el Promotor fiscal pide se sirva el Juzgado denegar el amparo de la Justicia de la Union que se solicita, por no existir la violacion del artículo 28 de la Constitucion general de la República.

Guanajuato, 25 de Febrero de 1873.—
José Aguilar y Córdova.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Guanajuato, 9 de Mayo de 1873.—Visto el presente juicio de amparo promovido por D. José Noriega Llacó, por sí y en representacion de las personas del comercio de Querétaro que figuran en el acta de fojas 1 y 2 y certificado de fojas 50 y 51, con escepcion de D. Pedro de Castro, D. Juan Carmona, D. Trinidad Rivera y D. Donaciano Sandoval, que se desistieron, contra los actos del Gobierno de aquel Estado, que al conceder á la casa de D. Cayetano Rubio exencion de toda clase de impuestos

establecidos y por establecer, por sus propiedades, industria, contratos ó introducciones de efectos para sus establecimientos, y al permitir que la expresada casa crío y circule entre los operarios de las fábricas de Hércules y la Purísima, vales al portador pagaderos en efectos en las tiendas de ropa y abarrotes de la misma casa, consideran los quejosos ser violatorios esos actos, de las garantías que otorga el artículo 28 de la Constitución federal, que prohíbe los monopolios y los privilegios, con solo las excepciones que marca. Vistos los informes de la referida autoridad; las pruebas producidas por los reclamantes; los pedimentos fiscales y todo lo demás que constante en autos ver convino.

Resultando, primero: que el Congreso de la Unión, por el decreto de 25 de Mayo de 1868, dispuso que se abriese un camino carretero de Querétaro á Tampico, autorizando al Ejecutivo federal para hacerlo por sí ó por contrata al mejor postor, y destinando á la obra, la cantidad de seis mil pesos mensuales.

Segundo: que la Legislatura del Estado de Querétaro, por decreto de 18 de Diciembre de 1870, autorizó al Gobernador para que formando compañías dentro ó fuera del Estado, contratase con el Gobierno Nacional la apertura del mismo camino, sobre lo que en Febrero de 1871 mediaron sin resultado entre dicho Gobernador y el Ministro de Fomento, las dos comunicaciones de fojas 167 y 169.

Tercero: que en 20 de Diciembre de ese año, el C. Gobernador Julio M. Cervantes de una parte; y de la otra D. Carlos M. Rubio con poder de D. Luis M. Rubio y Compañía, celebraron en la hacienda de Ajuchitlan, un contrato relativo al propio camino, que fué aprobado en decreto de 26 de Diciembre, siendo lo principal de este contrato, por parte del Gobierno, la exención á D. Cayetano Rubio de los impuestos establecidos y por establecer que causaren sus propiedades, industria, introducciones

de efectos para sus establecimientos, contratos relativos á esos mismos ramos, y los materiales necesarios para la construcción del camino; y por parte de D. Luis M. Rubio y Compañía, el compromiso de concluir este en tres años, fojas 181.

Cuarto: que en 30 de Noviembre de 1871, D. Luis M. Rubio y Compañía celebró con el Ministerio de Fomento el contrato que expresa la copia autorizada de fojas 163 á 169, para la continuación del mismo camino hasta un punto en que los ríos Moctezuma y Jamesí sean navegables, por cuyo contrato el Gobierno se comprometió á suministrar la cantidad de trescientos veinticinco mil pesos en mensualidades, y Rubio y Compañía á dejar concluido el camino en Agosto de 1874; fojas 163 á 169.

Quinto: que sabedor el Ejecutivo federal del contrato ajustado entre el Gobierno del Estado de Querétaro y D. Carlos M. Rubio, requirió á D. Luis M. Rubio y Compañía, para que dijese cual de los dos contratos había de cumplir, á lo que contestó: que no conocía el celebrado por su encargado con el Gobierno de aquel Estado; que no lo aceptaba ni aceptaría, y que el único que había de llevar á ejecución, era el celebrado con el Supremo Gobierno de la Unión; fojas 170 á 172.

Sexto: que el convenio de Ajuchitlan fué elevado á instrumento público en 30 de Enero del año pasado, con advertencia de que ya estaba contratada la construcción del camino con el Ministerio de Fomento, y con la modificación de que la exención de impuestos duraría hasta el 31 de Agosto de 1874; fojas 118.

Sétimo: que en 18 de Octubre del mismo año, el Gobierno de Querétaro, autorizado por la Legislatura, y D. Carlos M. Rubio por D. Luis M. Rubio y Compañía, otorgaron otra escritura rescindiendo la de 30 de Enero y sustituyendo la exención de impuestos, con una subvención de mil ciento setenta y seis pesos mensuales que se abonaría á la compañía constructora del cami-

no, desde Noviembre del propio año hasta Agosto de 1874, pudiendo Rubio rebajarla del importe de las contribuciones que tenga que pagar al Estado; fojas 185 á 190.

Octavo: que girado y girador de los cuatro vales que se hallan entre las fojas 180 y 181, reconocieron en forma esos documentos, lo mismo que los papeles amarillos y libreta siguientes, y tambien las que se registran á fojas 177 y 191.

Considerando: que el artículo 28 de la Constitución federal, tuvo por objeto elevar al rango de precepto fundamental la prescripción de los monopolios, los estancos y las prohibiciones proteccionistas que se oponen á la libertad de comercio é industria; que pudiendo las leyes ó actos de las autoridades contrariar aquel precepto, que importa una garantía para los comerciantes é industriales, es preciso examinar si los comerciantes promoventes de este juicio, han probado que con los actos de que se quejan, ha violado el Gobierno de Querétaro la expresada garantía, directa ó indirectamente; que si bien es cierto que aquel concedió á la casa de D. Cayetano Rubio, la amplia y absoluta exención de contribuciones de que habla la cláusula 3ª de la escritura de 30 de Enero, tal exención, aunque meramente graciosa, puesto que ya estaba contratada la continuacion del camino á Tampico con quien correspondia, no constituye directa é inmediatamente la autorizacion para ejercer un monopolio, ni puede considerarse como resultado indirecto suyo, el que la expresada casa venda sus mercancías á un precio mas bajo que el establecido en la plaza de Querétaro, toda vez que los quejosos no acreditaron ese hecho importante, ni tampoco el de la apertura de tiendas, posterior á la exención; y si bien acreditaron la cantidad que dejó de pagar por contribuciones la expresada casa en los diez meses que duró la exención, no es bastante esa sola circunstancia; y aunque tambien D. Ramon de la Portilla, encargado de las tiendas pertenecientes a la casa Rubio, declaró que á

los operarios de las fábricas de Hércules y la Purísima, se les dan los efectos que piden, con un cinco por ciento mas barato que á los otros consumidores, esto tampoco puede constituir monopolio, supuesto que aquel descuento ó baja de precio se contrae á solo los dichos operarios.

Considerando: que la falta de prueba de los dos hechos de que se acaba de hablar, hace tambien que no se pueda considerar como inductiva de monopolio la subvencion de mil ciento sesenta y seis pesos mensuales concedida á D. Luis M. Rubio y Compañía, por mas que se le haya autorizado á deducir esa cantidad de lo que importan las contribuciones que tenga que entonar.

Considerando: que los cuatro vales al portador y los papeles amarillos de que se ha hecho referencia, no pueden reputarse papel moneda, creado por la casa Rubio; pues no se ha probado que esa casa haya hecho una verdadera emision y circulacion entre personas distintas de los operarios de sus fábricas; que menos puede verse emision de papel moneda en las libretas ó cuadernos de que se registran muestras en los autos, y antes bien lo que se desprende, es la ejecucion de un contrato particular (que es preciso suponer por que no hay prueba en contrario) verificado entre los operarios y dueños de las referidas fábricas; por el cual aquellos reciben parte de su raya semanal, en dinero, y por parte en efectos, sin que tal sistema importe un monopolio, toda vez que sobre suponer la voluntad y consentimiento del operario, no trae consigo la absorcion del consumo de la Ciudad.

Por las expuestas consideraciones, y de conformidad con lo pedido por el C. Promotor fiscal de este Juzgado, es de fallarse y se falla: que la Justicia de la Union no ampara ni protege á D. Jose Noriega Ilica y sus representantes, en contra de los actos del Gobierno de Querétaro, de que se hizo mérito al principio. Notifíquese por los medios legales; publíquese en el Periódico oficial y remítanse los autos á la Cor-

te Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, para los fines de la ley.

Así el C. Lic. Antonio Rincon, Juez 1º suplente de Distrito del Estado, definitivamente juzgando, lo decretó, mandó y firmó. Doy fé.—Antonio Rincon.—Luis G. Medina.

Es copia que certifico. Guanajuato, 19 de Mayo de 1873.—Luis G. Medina, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Febrero 12 de 1874.—Visto el recurso de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Querétaro, por D. José Noriega Llaca, por sí y en representación de las personas del comercio de Querétaro, cuyas firmas aparecen en la acta de fojas 1 y 2, contra la concesion hecha á la casa de D. Cayetano Rubio por el Gobierno del Estado en el contrato celebrado en la Hacienda de Ajuchitlan, el 20 de Diciembre de 1871, por el C. Julio María Cervantes, como Gobernador y con autorizacion especial de la Legislatura, y D. Carlos Rubio con poder de D. Luis M. Rubio y Compañia, cuyo contrato aprobado por la misma Legislatura y elevado á escritura pública, exímia por tres años á D. Cayetano Rubio de los impuestos establecidos y por establecer que causaran sus propiedades, industrias, introducciones de efectos, contratos relativos á los mismos ramos y los materiales necesarios para la construccion de un camino de Querétaro á Tampico, obligándose por su parte D. Luis M. Rubio y Compañia, á construir y concluir dentro de tres años el expresado camino, con cuya concesion se han violado, segun manifiestan los quejosos, la garantía consignada en el artículo 28 de la Constitucion federal, por constituir un monopolio y un privilegio á favor de la compañía concesionaria, aun con las modificaciones que sufrió el repetido contrato por

otro celebrado en 18 de Octubre de 1872, en el cual se convino por las mismas partes contratantes que en el anterior: que la exencion de impuestos quedaba sustituida con una subvencion de mil ciento setenta y seis pesos mensuales que debería abonarse á la Compañia constructora del camino, desde Noviembre del propio año hasta Agosto del de 1874; pues en sentir de los promovedores, estando ya contratado por la misma Compañia con el Gobierno de la Union la apertura del camino de Querétaro á Tampico, y acordada la remuneracion correspondiente á ese servicio, la subvencion concedida por el Gobierno del Estado con el mismo objeto, no tiene ya razon de ser, convirtiéndose por ese motivo en un privilegio y en un monopolio disfrazado.

Visto el segundo punto por el cual se solicita igualmente el amparo federal por violacion de la misma garantía constitucional que en el anterior, con el hecho de consentir el Gobierno de Querétaro, que la casa de D. Cayetano Rubio expida y circule contra los operarios de sus fábricas, *valas y libretas*, pagaderos en efectos de las tiendas de ropa y abarrotes de la misma casa, y Considerando:

Que si bien la exencion de toda clase de impuestos concedida á D. Cayetano Rubio y Compañia por el contrato celebrado en Ajuchitlan el 20 de Diciembre de 1871, establecia un verdadero monopolio á favor del concesionario, por la facilidad de introducir todo género de mercancías en cantidad ilimitada y de expendirlas á un precio menor que los demas comerciantes de Querétaro, habiendo quedado revocada esa exencion por el convenio posterior de 18 de Octubre de 1872, sustituyéndose en su lugar, la subvencion de mil ciento setenta y seis pesos mensuales en los términos indicados, la cual, aun considerándose como un donativo gracioso hecho por los poderes del Estado, sin facultad alguna, el contrato así modificado, en nada vulnera las garantías que invocan los quejosos.

Que no está comprobado que el Gobierno de Querétaro haya autorizado por un acto positivo á la casa de D. Cayetano Rubio, para emitir los vales y libretas que circulan entre sus operarios, prohibiendo esto mismo á los demás comerciantes y dueños de fábricas, circunstancias necesarias para la constitucion del privilegio y del monopolio que se dice haberse concedido á la mencionada casa.

Por estas consideraciones, y con fundamento de los artículos 101 y 102 de la Constitucion federal, se decreta: Que es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada en 9 de Mayo del año pasado por el Juez de Distrito de Guanajuato, que conoció de este recurso, por escusa de los Jueces propietarios y suplentes del de Querétaro, que declara: que la Justicia de la Union no ampara ni protege á D. José Noriega Llaca y sus representados, en contra de los actos del Gobierno de que se ha hecho mérito al principio, esceptuándose de esta declaracion á los Sres. D. Pedro de Castro, D. Juan Carmona, D. Trinidad Rivera y D. Donaciano Sandoval, que se desistieron del recurso intentado.

Devuélvanse las actuaciones al Juez de Distrito que las elevó á revision, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*J. M. Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José M. Lozano.*—*José Arteaga.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*S. Guzman.*—*L. Velasquez.*—*M. Zavala.*—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia que certifico. México, Abril 28 de 1874.—*Lic. Emilio Ordaz*, oficial mayor interino.

CRIMINAL.

Causa instruida en el Juzgado de Distrito de Durango, contra Carlos Valles por circulacion de moneda falsa.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El C. Jefe de Hacienda, encargado de llevar la voz fiscal, dice: que por los recados que obran en autos no aparece ninguna prueba de que Carlos Valles haya falsificado moneda; pero si está probado plenamente que portaba monedas falsas, por cuyos fundamentos pide se imponga al reo en calidad de circulador de moneda falsa, el castigo que demarcan las leyes de la materia.

Durango, Junio 19 de 1873.—*Juan Nájera.*—una rúbrica.

Es copia que certifico. Durango, Agosto 12 de 1873.—*J. Nájera.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Durango, Junio 27 de 1873.—Vista esta sumaria instruida contra Carlos Valles, mayor de 50 años, casado, jornalero y de esta vecindad, por habérsele encontrado cuatro piezas de moneda falsa consistentes en tres pesetas y un real. Considerando: que aunque por confesion del acusado está completamente comprobado que él era el portador de las monedas de que se trata en esta causa, hay sin embargo en su favor, dos circunstancias que no pueden pasar desapercibidas, y son la embriaguez en que se encontraba el día de su aprehension, y la manifestacion franca de las otras monedas, una vez que se le dijo que la primera era falsa. Que por lo expuesto, Carlos Valles no puede ser considerado como circulador doloso de moneda falsa, y la falta de precaucion que pesa sobre él, está suficientemente compurgada con el tiempo sufrido de prision.